

## **ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y BENEFICIO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARA LA AGENDA 2030 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS**

La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Agenda 2030 a fin de avanzar en la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestras sociedades. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), las 169 metas y los 232 indicadores que recoge tienen un horizonte temporal en el año 2030. La Agenda 2030 pretende ser una hoja de ruta que allane el camino hacia un planeta más sostenible y una sociedad más justa, incidiendo no sólo en el aspecto medioambiental, sino también en el social y el económico.

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias enumera las materias sobre las que el Principado de Asturias ostenta competencia exclusiva, materias que encajan en dichos ODS, como son las relativas a la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria; los aprovechamientos hidráulicos incluidos los hidroeléctricos, canales y regadíos de interés, las aguas minerales y termales y aguas subterráneas cuando discurren íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma; la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico; la investigación; la asistencia y bienestar social, las actuaciones de reinserción social; la protección y tutela de los menores; la industria y la energía.

Por su parte, el artículo 11 establece que en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde al Principado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias que dicho precepto enumera, entre las que se encuentran los montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos; la sanidad e higiene; la coordinación hospitalaria en general; la ordenación farmacéutica; la protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes en ríos, lagos y aguas interiores y normas adicionales de protección del medio ambiente; el régimen minero y energético; la ordenación del sector pesquero y la defensa del consumidor y del usuario.

Por último, el artículo 12 del citado Estatuto refiere que corresponde al Principado de Asturias la ejecución de la legislación del Estado, en los términos que en la misma se establezca, sobre, entre otras materias, la ejecución, dentro de su ámbito territorial, de los tratados internacionales en lo que afectan a las materias propias de las competencias del Principado de Asturias y la gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social. Competencias, todas ellas que, con el resto de las recogidas en el Estatuto trasladan al Principado de Asturias, el compromiso de tratar de lograr, dentro de su esfera de atribuciones y territorio, la consecución de los ODS.

Por este motivo, el Principado de Asturias ha de dotarse de una estructura ad hoc que, con vocación instrumental y marcado carácter técnico, coordine la ejecución de las actividades e iniciativas que se adopten en las materias relativas a la Agenda 2030, alineando los proyectos elegibles con las áreas y políticas estratégicas previamente definidas. Para ello, resulta necesario un órgano colegiado de consulta y participación, con el objetivo de prestar asesoramiento y colaboración institucional entre la Administración del Principado de Asturias y la sociedad civil para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030.

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Presidencia, entre otras, la competencia relativa a la Agenda 2030. Mediante el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de esta Consejería, correspondiendo a la misma, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030, la implementación de los medios para la consecución de los objetivos planteados por la Agenda 2030.

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 10.1.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que recoge su competencia exclusiva en la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con el presente decreto se regula, como un órgano colegiado de consulta y participación, con el objetivo de prestar asesoramiento y colaboración institucional entre la Administración del Principado de Asturias y la sociedad civil para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, el Consejo para la Agenda 2030 del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería de Presidencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, para la tramitación del citado proyecto debe incorporarse al expediente un estudio del coste y beneficio que el mismo vaya a representar, y cuyo resultado se recoge en el presente informe:

## **Costes**

La modificación supondrá por parte de la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 la necesidad de dar cobertura al Consejo para la Agenda 2030 del Principado de Asturias, proporcionando los medios oportunos para su convocatoria y la realización de los cometidos atribuidos en el decreto, que no tendrán repercusión económica sobre el programa 126F, ya que la gestión del Consejo formará parte de los cometidos asignados al personal de la Dirección General y no se prevé la creación de nuevos puestos de trabajo, siendo suficiente con la reasignación de efectivos en el marco de la Dirección General.

## Beneficios

El Consejo para la Agenda 2030 del Principado de Asturias permitirá la necesaria coordinación en materia de Agenda 2030, determinar e impulsar las actuaciones prioritarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ejerciendo funciones de consulta, coordinación y colaboración.

El cumplimiento de este beneficio contribuirá a determinar e impulsar las actuaciones prioritarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

## CONCLUSIONES

Por todo ello, consideramos que los beneficios obtenidos por el presente proyecto de decreto superan en todo caso los costes del mismo, y estimamos que debe ser tramitado para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

En Oviedo, en la fecha de la firma digital  
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA,  
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030

JOSE ANTONIO  
GARMON  
FIDALGO -  
[Redacted]

Firmado digitalmente  
por JOSE ANTONIO  
GARMON FIDALGO -  
[Redacted]  
Fecha: 2021.05.17  
15:49:15 +02'00'